

A propósito de la reforma

Araceli Damián*

Con sorpresa recibieron algunos sectores empresariales la “reforma fiscal” propuesta por Carstens. Sin que contenga, al menos en apariencia, importantes alzas en las tasas impositivas, el Secretario de Hacienda, declara que intenta clavar el diente a la clase media y a ricos por igual mediante la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), que sustituye al impuesto al activo.

La recaudación fiscal en nuestro país es raquítica, pero la pregunta es ¿para qué quiere el gobierno federal más dinero si el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no contempla un cambio en el rumbo de la participación del estado en la economía? El PND propone impulsar la inversión privada en infraestructura y servicios, no la inversión pública, además de carecer de una estrategia dirigida a promover la actividad económica (mediante créditos públicos con tasas preferenciales, o con inversión en investigación tecnológica, etc.).

En materia de desarrollo social tampoco necesitan más dinero. El *Oportunidades* ya tiene (según el discurso oficial) cubiertos a todos los pobre extremos del país, únicos sujetos de política social en la visión neoliberal que caracteriza a los gobiernos panistas y priístas. Es más, si fuese cierta la baja de la pobreza en nuestro país Hacienda debería de recortar el presupuesto al *Oportunidades*.

No parecen necesitar más recursos para educación. En cuanto a la básica la nueva ley del ISSSTE garantiza los recursos necesarios para tener contenta a la Maestra Gordillo y su nefasto sindicato. En cuanto a la educación pública media y superior, este gobierno pretende acabar con ella, ya que, según los sesudos análisis de los evaluadores del gobierno federal, en esos niveles educativos se subsidian a los “ricos” del país. Parece que ninguno de esos evaluadores da clases en universidades públicas, ni tampoco han visto quienes hacen las enormes colas para solicitar inscripción en estas casas de estudio.

En materia de salud, la inversión proyectada es muy baja en relación al rezago. Lo único que se tiene previsto es el pago de la zanahoria de ocho mil millones de pesos ofrecidos a la señora Gordillo (y a su amigo Yunes), a cambio de la aprobación de la nueva Ley del ISSSTE (a quién pertenecerán las empresas

constructoras a las que se encargará la construcción de los nuevos hospitales, si se construyen algún día). Pero en realidad el planteamiento de la nueva ley es fomentar la subrogación (beneficiando a los hospitales privados).

El gobierno federal requerirá más recursos para absorber el costo de pagar las pensiones de trabajadores ya jubilados y de los que se acojan al Décimo transitorio de la nueva ley (algo parecido, pero no igual al viejo régimen). Lo anterior sí representa una nueva carga fiscal, que absorberá el estado, como lo hizo al llevar a cabo la reforma a la ley del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) en 1997.

Pero probablemente el asunto vaya más allá. Recordemos que las dos principales recomendaciones de reforma estructural que hizo el FMI (Fondo Monetario Internacional) dos meses antes de que su ex empleado, es decir Carstens, se convirtiera en el Secretario de Hacienda, fueron: 1) permitir “compartir el riesgo con el sector privado en la inversión que realiza Pemex” y, en consecuencia la 2) reducir la dependencia de los ingresos petroleros, lo cual se constituye en una condición necesaria para lograr la anterior reforma.

Al FMI, perdón al gobierno federal, no le interesa sanear PEMEX sino venderlo. La propuesta del ex funcionario del organismo internacional refleja las prioridades de dicho organismo. Carstens sabe que si se privatiza PEMEX sin reducir la dependencia de la finanzas públicas de los ingresos petroleros llevaría al país a incurrir en un déficit fiscal “inaceptable”. De esta forma México perdería la aprobación de los organismos financieros internacionales, lo que a su vez llevaría a la desgracia internacional a nuestro flamante Secretario de estado.

Por tanto, la reforma fiscal no busca promover el crecimiento económico, ni el empleo, ni reducir la desigualdad social. La reforma busca sanear las finanzas para poder privatizar PEMEX sin alterar el déficit fiscal. Este último indicador junto con el control de la inflación son considerados por los tecnócratas neoliberales (liderados por el FMI) como indicativos del éxito macroeconómico. Sin embargo, como diría el Premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz (*Globalization and its Discontents*, 2002, Norton, Nueva York y Londres) para el FMI un país con un déficit fiscal e inflación aparentemente en equilibrio puede tener un grado de

calificación “A” (como fue el caso de Argentina antes de su terrible crisis a finales de los noventa), aun cuando padezca de un desempleo de dos dígitos durante varios años.

Stiglitz añade que, para la mayoría de los economistas (yo diría más bien para la minoría de economistas críticos que aun quedan en el mundo) ese país sería un desastre en términos macroeconómicos, como lo es ahora el nuestro, a pesar de que el FMI y el Banco Mundial digan lo contrario. Como buen ex-funcionario del Fondo, a Carstens este tipo de desastres no le interesan. Trae consigo la tarea dictada desde las cúpulas del poder financiero internacional: crear las condiciones para vender PEMEX a trasnacionales. El saqueo continua.

*El Colegio de México, adamian@colmex.mx